

Editorial

A semejanza de la condición política estadounidense, con la restauración del régimen priista, México se decanta como un Estado con un partido dominante, el partido de los empresarios, que cuenta con tres facciones parlamentarias y gobernantes: los priistas, los panistas y los perredistas. Formalmente, las tres cabezas cubren todo el espectro político, de derecha a izquierda; sin embargo, han logrado desplazar al sistema político hacia el hemisferio derecho al consolidar acuerdos fincados en una coalición neoliberal de facto, cuya expresión más acabada es el Pacto por México, una instancia metaconstitucional desde donde se prescriben los lineamientos legislativos encaminados a cristalizar las reformas neoliberales de tercera generación, que en el país se presupone un ataque frontal al mundo del trabajo y los sindicatos, un vuelco empresarial al sistema educativo, la mayor tributación de los sectores subalternos y la privatización encubierta del petróleo y la electricidad, en pauta extractivista.

Con el antecedente del golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), para afianzar la reforma en las telecomunicaciones y el usufructo de la fibra óptica a favor de monopolios como Televisa, y el desmantelamiento de Mexicana de Aviación, para darle la puntilla al sindicato y promover a Aeroméxico, se instrumenta una contrarreforma laboral reclamada ampliamente

por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para derrocar las llamadas conquistas históricas e imponer un régimen de inseguridad laboral: pago por horas, despido libre, subcontratación. Estas reformas trastocan la sindicalización, permiten que la patronal eluda responsabilidades en prestaciones y prepara el terreno para una eventual quiebra del sistema de seguridad social con miras a su completa privatización, que ya ha avanzado en el socavamiento de las pensiones y el desmantelamiento inducido de los servicios médicos y hospitalarios en beneficio del conglomerado industria de los seguros, farmacéuticas y hospitales privados. Ahora se aprovecha la existencia de un bono demográfico, es decir, fuerza de trabajo joven sin experiencia sindical, dispuesta a ocupar plazas precarias, inseguras y temporales.

A partir de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la presión del CCE y Mexicanos Primero, organizaciones que representan los intereses de la élite mexicana, y sin consultar al magisterio, padres de familia y estudiantes, se impuso la reforma educativa. El primer paso fue apresar a la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, aparentemente por oponerse a la reforma y no haber respaldado electoralmente al candidato priista. Esta reforma es consecuente con la visión empresarial de

formar “capital humano”, es decir, personal técnico requerido por las corporaciones, sin formación humanista, cívica y política. Esta reforma tampoco reconfigura el ámbito burocrático y sindical, ni propone una modificación sustancial del proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje, mejoras a la infraestructura y a las condiciones laborales. Por el contrario, se presenta como una reforma punitiva, que descarrila al sindicato como instancia de defensa de los derechos del magisterio, implementa una política de despidos mediante evaluaciones y somete a un control permanente al magisterio.

Sin tocar los intereses de las grandes corporaciones, en particular sus privilegios fiscales, y como compensación de la eventual erosión fiscal por la privatización encubierta de Petróleos Mexicanos (Pemex), el gran contribuyente, se pasa la factura a los contribuyentes medianos, con la ampliación de la base tributaria, como el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) en la franja fronteriza, la aplicación de impuestos a alimentos chatarra que tienen en la población de bajos recursos un nicho de mercado el aumento de impuestos a la industria minera, entre otros. Esta reforma, sin embargo, no está encaminada a financiar un proyecto de desarrollo nacional, sino que sigue canalizando grandes tajadas al gasto corriente burocrático, en especial a las fuerzas represivas que encabezan la estrategia de militarización gubernamental en la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Encajonada en una visión extractivista, la reforma es una regresión histórica sobre el usufructo de la renta petrolera, que desde la década de los treinta del siglo pasado era una potestad estatal, de donde se acopiaban recursos fiscales que, posteriormente, eran redistribuidos a la sociedad a partir de la red de protección social. De esta forma, fue posible también articular una economía pública que multiplicaba la presencia estatal en los más diversos sectores y ramas productivas. Este dinamismo estatal no estaba exento de corrupción y enriquecimiento ilícito, tanto de la burocracia política estatal como de los liderazgos sindicales. No obstante, la reforma energética pretende reabrir las puertas a la inversión extranjera en la extracción de petróleo para su exportación, como materia prima, para su posterior procesamiento y comercialización. Las grandes corporaciones transnacionales, como Exxon y Chevron, además de la ibérica Repsol, serían las beneficiarias. Entonces se perdería, por completo, la tentativa de canalizar una parte significativa de la renta petrolera para financiar un eventual proyecto de desarrollo nacional, para volcarlo, totalmente, a las arcas del capital extractivista transnacional. Como justificación, los políticos neoliberales, que no consultan de ningún modo a la población para tomar las grandes decisiones, aplican la consabida narrativa neoliberal, la cual reza que las contrarreformas servirán para imprimirle competitividad

al país, atraer inversión, alentar el crecimiento, generar empleo, incrementar la recaudación fiscal e incentivar la prosperidad. Una y otra vez, la práctica ha demostrado que las reformas neoliberales están encaminadas, exclusivamente, a reconcentrar el poder económico y político de la oligarquía nacional y de los intereses transnacionales del gran dinero. Para compensar el eventual desfaldo al erario, la coalición neoliberal extiende la gama de impuestos a la población, en un entorno donde los salarios se mantienen deprimidos, cunde el desempleo y las corporaciones golpetean la economía popular.

La derechización del sistema político mexicano, el contubernio de los consorcios mediáticos y el inmovilismo de la mayoría de la población pavimentan el camino a esta contrarreforma neoliberal. Algunos movimientos sociales se expresan en contra de estas reformas, aunque de manera parcial, por ejemplo, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en contra de la privatización del petróleo y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa, cada uno refrendando luchas parciales. No obstante, poco se ha avanzado para articular un poder popular aglutinador y portador de un proyecto plurinacional alternativo al desarrollo depredador y excluyente en curso.

[HUMBERTO MÁRQUEZ]